

Los usuarios piden al Gobierno el millón de euros que aportaron a las obras del trasvase

La Junta Central del Júcar-Vinalopó aplaza la demanda patrimonial por los daños y perjuicios del cambio del proyecto a la espera de un gesto del Ejecutivo



F. J. B. L

a Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó tendió ayer un nuevo puente al Gobierno para tratar de encontrar una fórmula que desbloquee el conflicto que mantienen los regantes de la provincia con el Ministerio de Medio Ambiente por el proyecto del trasvase, cuyas obras arrancaron el pasado verano con la toma del agua que no quieren los usuarios. El presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, reforzado por enésima vez en la asamblea celebrada el día 13, anunció que los usuarios están dispuestos a renunciar a la reclamación de 100 millones de euros por los daños que sufren al haberse retrasado las obras, si el Ministerio flexibiliza su postura y acepta que hasta el Vinalopó, l'Alacantí y la Marina Baixa pueda llegar agua potable.

De momento y como gesto de buena voluntad, la Junta sólo ultima la petición de los 950.000 euros -cantidad avalada por el Consell- que tuvo que aportar para suscribir el crédito de 75 millones con el que iba a pagar su parte de las obras. Expulsados del proyecto hace dos años, los usuarios confían ahora en que los relevos que se han producido en Aguas del Júcar -sociedad absorbida por Acuamed- y la victoria holgada de Rodríguez-Zapatero en las elecciones generales sirvan de bálsamo para poder recuperar el diálogo. "Nosotros nunca rompimos las negociaciones y siempre hemos estado dispuestos a negociar porque el trasvase sea de agua de calidad, pero tampoco podemos quedarnos quietos y esperar a que el Ministerio mueva ficha, de ahí la campaña de recogida de firmas y los recursos que tenemos planteados", subrayó Andrés Martínez.

Las obras del trasvase Júcar-Vinalopó avanzan a buen ritmo con el proyecto modificado y, de momento, el nuevo equipo responsable de su ejecución no ha movido ficha, ni contestado a la oferta de los usuarios para que se envíe agua de la Cullera al parque natural de la Albufera y se traslade a Antella la toma para captar el caudal que se enviará a la provincia. Los usuarios pretenden negociar directamente con el Gobierno y también han remitido la nueva alternativa a los regantes valencianos -Acequia Real del Júcar-. Por su parte, el Consell agotó en octubre la vía política para buscar una solución que desbloquee el proyecto y también espera ahora la configuración del Ministerio de Medio Ambiente para tratar de jugar sus bazas.

Los futuros usuarios recelan del agua de la Marquesa tras detectar restos de residuos tóxicos que les llevaron, incluso, a levantar acta notarial. La Junta Central denuncia que la propia Confederación Hidrográfica del Júcar ha detectado en la red de control de sustancias peligrosas de la cuenca del Júcar restos de compuestos de pesticidas -insecticidas y funguicidas-, cuya ingestión pudiera provocar a medio y largo plazo problemas sanitarios. En concreto, en las estaciones de los ríos Magro, Verde y Sueca-Fontanely detectan, según el registro notarial de la Junta Central, la presencia, entre otros, de restos de clorpirifos, imazalil y lindano en la mayoría de los meses del año. La CHJ siempre ha sostenido, por su parte, que el agua cumple con todos los parámetros de la legislación actual europea de riego y la Ley Integral de Calidad del Agua.

Por otro lado, la Junta Central va a reclamar la CHJ que le devuelva las competencias para controlar el nivel de los acuíferos. Además, pretenden que el Ministerio de Medio Ambiente les incluya en sus presupuesto, al ser una corporación de derecho público adscrita al Ministerio. La Junta carece de subvenciones y tiene un presupuesto anual de 200.000 euros.



Agricultores y alcaldes durante la visita a la central de impulsión de Cortes en el verano de 2005, tramo del trasvase que se eliminó del proyecto A. I.

MULTIMEDIA



Fotos de la noticia